

Las experiencias del empresariado colombiano y las medidas tomadas por éste para frenar la inseguridad, son un caso de estudio para implementarlas en México e ilustran cómo un grupo unido puede influir en las políticas públicas de seguridad de manera productiva. El reto está en ver si el empresariado mexicano está dispuesto a pagar un alto precio económico, financiero, político y de reputación por la seguridad de su equipo y del país.

Como dato final es relevante mencionar lo siguiente: según el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el crimen y la violencia le cuestan a México un punto porcentual del PIB en términos de crecimiento cada año por ventas y empleos perdidos y por la cancelación de inversiones, entre otros aspectos. El Secretario declaró también en 2007 que en México el crimen incrementó los costos para realizar un negocio de entre el 5 y 10% al año. Igualmente, como recientes reportes en los periódicos señalan, algunos ejecutivos han llegado a gastar un 45% de sus ingresos en seguridad. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) afirmó desde 2004 que los costos de la inseguridad representaban más de 12% del PIB, y recientemente anunció que era del 15% en México. Estos costos incluyen desde las alarmas, rejas electrificadas, blindaje de vehículos, circuitos cerrados de televisión, rastreo satelital de mercancías, escoltas para ejecutivos, seguros, etcétera. Esto sin contar las pérdidas económicas y el costo de oportunidad de invertir en seguridad cuando los recursos financieros se pueden reinvertir en los negocios mismos para expandir las operaciones y generar más empleos.

30. La seguridad privada

*Jorge Medellín*¹⁶⁰

El explosivo crecimiento de las empresas de seguridad privada en México es consecuencia del fracaso del esquema de seguridad pública, diseñado por autoridades federales y estatales. Éste, debió haber proyectado escenarios de desgaste del modelo

¹⁶⁰ Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.

policíaco, así como del crecimiento y mutación de la criminalidad en sus variadas expresiones, de las formas de responder a esos retos integralmente, y no sólo de la reacción operativa y la represión gradual hacia determinados grupos sociales. El desgaste de los esquemas y formas de concebir y aplicar los conceptos de seguridad pública dio paso a la erosión de las instituciones encargadas de ésta. De la misma manera, acabó desdibujando y exhibiendo las limitaciones de los cuerpos policíacos y de sus estrategias.

A principios de los años noventa, la percepción ciudadana sobre el tema de la seguridad privada como una solución viable para llenar los huecos que las corporaciones oficiales no alcanzaban a cubrir, pareció darle a los tres niveles de gobierno una suerte de respiro para quitarse presiones ante una agenda insospechada y a la vez creciente. En el mejor de los casos, el incremento delictivo fue visto como una consecuencia directa y lógica del crecimiento poblacional, del desempleo o del difícil entorno socioeconómico heredado del subdesarrollo. La policía siguió con esquemas reactivos y represivos. Por su parte, el delito se multiplicó, se hizo más organizado y paulatinamente fue rebasando a las instituciones para luego penetrarlas e incluso erosionarlas.

El hueco fue llenado, el nicho de mercado para ofrecerle al comerciante, al empresario o al ciudadano común, un bien inapreciable como el de la seguridad privada, se tornó su garantía de supervivencia, más allá de lo que el sistema dijera otorgarle, y fue adquiriendo forma hasta ser considerado como parte importante de una eventual solución al tema de la criminalidad.

Para 1995, año en el que se creó el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), este gremio contaba con alrededor de 6 mil empresas que crecían o se mantenían sin controles ni estándares reales para medir su preparación, efectividad e incidencia real en la disminución de delitos. De este universo, sólo 2%, aproximadamente 120 compañías, cumplían con las normas de calidad y control. El resto de los actores de ese sector continuaron creciendo sin mayores problemas, reproduciendo los mismos esquemas de ineficacia de las corporaciones policíacas del país. Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) carece de cifras precisas sobre el tema. En su sitio de internet existe un apartado de la Dirección General de Seguridad Privada, en el que un mapa interactivo de la República Mexicana muestra en color azul el detalle de las empresas registradas en cada entidad. Sin embargo, sólo aparecen datos estadísticos de 14 estados en los que se reporta la operación de 226 empresas. Mientras que las demás entidades aparecen con la leyenda “Información Estadística No Disponible”.

En el país, la mayoría de los cuerpos policíacos permanecen estancados por la falta de preparación; elevados niveles de corrupción; malas condiciones de alimentación, salario y armamento; y ahora están asediados sus miembros por los cárteles de la droga. Al mismo tiempo, las empresas de seguridad privada se expanden sin

control y alcanzan ganancias equivalentes a 1% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que corresponde a unos ocho mil millones de dólares al año, con o sin crisis, según Ricardo Torres Escoto, presidente del CNSP.

La cifra no es nada despreciable y ha alentado, en los últimos dos años, a jóvenes inversionistas suizos, españoles, británicos y norteamericanos a establecerse en México, para crear compañías cuyo éxito inicial está asegurado, ya que, de inicio, sus cartas credenciales avalan una mayor preparación de corte para-militar y una imagen aceptable para quienes necesiten sus servicios.

En consecuencia, aproximadamente 500 compañías serias están registradas ante la SSP con mayores controles sobre su personal y menos amonestaciones o clausuras temporales, compiten hoy en un ámbito calculado en más de 10 mil empresas, sobre las que no existen mayores controles o un seguimiento a fondo.

Es muy probable que este universo de empresas esté integrando en sus filas a los más de 60 mil ex-policías de diversas corporaciones municipales, estatales y federales dados de baja en los últimos cinco años. Sobre esta gente no hay seguimiento y sí largos expedientes detallando incapacidades físicas, mentales y operativas que les costaron el empleo.

Lo que ocurre en México con la presencia y desempeño de las empresas de seguridad privada deja al descubierto, también, el grado de desconfianza de la ciudadanía hacia los cuerpos policíacos, así como la falta de controles sobre ese sector estrechamente ligado a agendas pendientes que tienen que ver con la construcción de una estructura sólida de seguridad pública. Ese es el tema de fondo. La existencia de las empresas de seguridad vino a llenar, en principio, el enorme vacío generado por la creciente incapacidad y limitaciones de los cuerpos policíacos, que más tarde sumaron a su ineficacia el asedio por las buenas (plata) o por las malas (plomo) de los cárteles de la droga.

Las corporaciones que no han sido hostigadas por el crimen organizado se debaten entre la falta de entrenamiento, los bajos sueldos, las corruptelas internas y los abusos o inacciones al atender los reclamos de la ciudadanía. Ciertamente, no todos caben en la misma canasta y no todos pertenecen a ella, pero la preparación y el compromiso de los policías que se han involucrado en la corrupción, no ha bastado para hacerle frente a la delincuencia.

Lo mismo sucede con las empresas de seguridad privada México, cuya presencia creciente no ha mermado la actividad criminal y sí se ha traducido en mayores gastos para cuidar el patrimonio personal. Alejandro Desfassiaux, dueño y director de una de las empresas con mayor antigüedad en México, señaló, en 2008, que “pareciera una cuestión de tecnología o de dinero, pero también es de coordinación; hoy se gasta 10 mil veces más en seguridad pública que hace 25 años”. Sin embargo, “los índices de inseguridad se han disparado 400 veces más”, reconoció en entrevista concedida a

una publicación dirigida al sector empresarial mexicano. Finalmente, agregó que en el sector privado, una empresa pierde entre 8 y 11% de sus utilidades anuales por la inseguridad, principalmente por robo, según el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

La existencia de este tipo de empresas es necesaria, pero más lo es su verdadera profesionalización y el establecimiento de controles sólidos que delimiten sus capacidades. Se deben definir sus herramientas, el adiestramiento de quienes son contratados como guardias para diversos tipos de trabajo y, sobre todo, su papel e inserción en un esquema nacional de combate a la delincuencia a partir de dos objetivos centrales: prevenir el delito y coadyuvar de manera fehaciente en su persecución. No obstante, el crecimiento de prestadores de servicios privados se ha dado a la par del proceso de desgaste y del reconocimiento tardío de las autoridades de todos los niveles sobre las deficiencias históricas de los cuerpos policíacos, empezando por la dispersión de recursos humanos y técnicos para combatir a la delincuencia, y pasando por la ausencia de una política criminal verdadera, que se ocupe, a nivel nacional y regional, del fenómeno delictivo de manera integral.

Las deserciones de policías, militares y personal de escoltas con deficiente preparación o antecedentes penales, nutren las filas en muchas de las empresas de seguridad privada del país que operan sin registro oficial o que ostentan documentos apócrifos o incompletos.

Este segmento del gremio de la seguridad privada le da continuidad a las formas de corrupción e inoperancia que caracterizan a los cuerpos policíacos a los que no se ha logrado unificar en adiestramiento, criterios operativos, sueldos, armamento, coordinación operativa y en el registro puntual de todos sus elementos.

Los dos frentes siguen abiertos. La seguridad pública presenta fallas y descoordinación, mientras que la seguridad privada carece de controles sobre miles de prestadores de servicios, que al final brindan un producto cuyo sello principal es el mismo que erosionó y pulverizó, en varios puntos del país, a la estructura policial que tenía como misión el combate del crimen.